

EDITORIAL

Violencia secular en estado de gracia

En las entrañas de la economía y la política de la modernidad capitalista, representada por un cúmulo de mercancías, la parafernalia del espectáculo y la dominancia de instituciones en descrédito, se aloja una violencia secular que contraviene los fundamentos de la reproducción de la vida humana y cuestiona la viabilidad del sistema económico basado en el trabajo abstracto, la acumulación y el poder del dinero. En los albores del capitalismo, la separación forzada de los medios de subsistencia de campesinos, artesanos y pequeños productores posibilitó la capitalización inicial de territorios y medios de producción expropiados, al igual que permitió la conversión de los productores directos liberados en trabajadores asalariados. El parto del capital mediante el cercamiento de los bienes comunales y la proletarización estuvo colmado de «sangre y lodo». Algo similar sucedió durante la embestida colonial que esclavizó a millones de personas de África y América, sin contar el exterminio de pueblos originarios, para saquear la riqueza bruta (sobre todo minerales) en beneficio de los reinos guerreros y parasitarios de la península ibérica, los cuales estaban aún subdesarrollados y transferían finalmente la riqueza a Inglaterra, centro económico en el que se estaba gestando la Revolución industrial.

La posterior consolidación de Estados Unidos como potencia imperialista, a partir de la segunda posguerra, cambió el eje rotatorio del sistema mundial y el centro de gravedad donde convergía la mayor parte del excedente generado en la economía global gracias al poder del dinero, las corporaciones capitalistas y la supremacía militar. Esta superpotencia no ha dudado en utilizar la guerra como estrategia principal para conquistar territorios, abrir mercados, derrocar gobiernos, amedrentar poblaciones y sostener su dominación mundial. La guerra también ha

fungido como un instrumento ideológico para señalar enemigos, justificar incursiones armadas, decretar estados de excepción y consolidar una industria militarizada de amplio espectro que abre grandes espacios de valorización. En sí misma la guerra es un negocio formidable.

El imperialismo se ha ejercido en gran parte del siglo XX de manera colegiada por el triunvirato formado por Estados Unidos, Europa occidental y Japón, como expresión del capitalismo triunfante, luego del derrocamiento del socialismo real o del capitalismo de Estado incubado por el bloque soviético. La militarización de las relaciones internacionales ha representado uno de los puntales de la globalización del capital. A consecuencia de la alianza de los ejércitos imperiales, la égida de la OTAN, el influjo de los organismos internacionales plegados al Consenso de Washington, la expansión de los grandes capitales basados en el triunvirato y las alianzas con Estados cliente de las periferias, el imperialismo colectivo ha ejercido el gobierno de la mayor parte del mundo e impuesto las pautas generales de la política, la economía y la cultura. Dos guerras mundiales, una innumerable cantidad de guerras siempre en suelo enemigo y un tejido de bases militares son la cara visible de un complejo industrial-militar que ha permitido la implementación de la violencia como recurso de dominación mundial. El sector militar ha soportado el despliegue industrial, no sólo por formar él mismo un sector económico con un enorme soporte tecnológico y presupuestal, articulado a otros sectores igualmente estratégicos (energético, farmacéutico y telecomunicaciones), sino que cumple el papel de instrumento político por excelencia para la expansión de capitales y la conquista de mercados a nivel mundial, con lo cual se fincan las condiciones de posibilidad de la extracción de excedente.

En todas las regiones del mundo, y en particular en América Latina, el dominio de Estados Unidos resulta determinante para el devenir de los países de la región, que se debaten entre subordinarse al imperio o

luchar por la liberación. Bajo la doctrina de la seguridad nacional, que concibe a América Latina como el área de influencia de Estados Unidos —donde era impensable, por ejemplo, la penetración de intereses considerados ajenos, como los soviéticos—, se han implementado varios programas (por ejemplo, la Alianza para el Progreso) dentro de las políticas de desarrollo, a la vez que se han orquestado golpes de Estado, patrocinado gobiernos dictatoriales, financiado grupos armados, decretado la guerra contra las drogas y, en general, impuesto una política de guerra de amplio espectro con distintos focos y episodios, la cual se complementa con la aplicación de programas económicos favorables a los capitales monopolistas sedientos de territorios y mercados, trabajadores y recursos naturales, ganancias y rentas. El dominio geoestratégico recruce la transferencia de excedente económico de la región hacia los centros de la tríada mediante el oneroso pago de la deuda externa —de suyo ilegítima—, el intercambio desigual, la remisión de ganancias, dividendos y rentas. Esto ha sido posible por el renovado saqueo de recursos naturales y la explotación redoblada del trabajo.

No todo ha sido entregado a los centros. Las oligarquías nacionales también han medrado del trabajo colectivo y absorbido grandes porciones del valor generado; pero una parte significativa la tiene que ceder al capital multinacional. Los gobiernos dictatoriales, autoritarios y antidemocráticos, incluso simulando formas democráticas, han sido ejercidos por personeros del bloque social dominante formado por terratenientes, industriales y financieros. Debido a la unción entre poderes fácticos y poderes instituidos, dicha elite controla a los partidos políticos, parlamentos, burocracias, ejércitos, policías y medios de comunicación.

Sin embargo, en algunos países se han registrado revoluciones o gestas populares en el sentido de que movimientos sociales, frentes populares, inclusive movimientos guerrilleros, en distintos momentos, al amparo de diversos proyectos e ideologías y bajo diferentes procedimientos,

han conseguido triunfos que se cristalizan en la formación de gobiernos populares de diverso signo pero en todo caso opuestos a las determinaciones del imperialismo y las afrentas de la oligarquía: desde la emblemática Revolución cubana, pasando por el breve periodo del gobierno socialista chileno hasta los más recientes gobiernos de la región andina y amazónica. Proyectos de gobierno popular en ciernes que resisten los embates de las oligarquías y las derechas latinoamericanas fuertemente apoyadas por los poderes de Estados Unidos y las derechas europeas con intereses empresariales en la región, amén de que las contradicciones internas de los procesos de transformación no logran superar del todo las condiciones ancestrales de subdesarrollo, como la dependencia anquilosada por las economías rentistas. Sobre tales experimentos de transición política, pende la amenaza de la reversión de logros sociales debido al desencanto popular, el golpeteo de grupos de interés y el influjo externo.

En la era del capital monopolista, con una presencia decisiva del capital financiero-rentista, que despliega su radio de acción a escala mundial en pos de ganancias superlativas en momentos en los que se agudiza la crisis civilizatoria, se precipita la fractura de la reproducción de la vida humana dentro de un complejo planetario en decadencia; también se acrecienta la violencia que rememora el acto primigenio del capitalismo embrionario y se renueva como un dispositivo necesario y permanente para imponer la lógica de valorización del capital en contra de la voluntad de comunidades, pueblos y sectores sociales que defienden sus modos de vida. Es una guerra sin cuartel, una especie de Estado de excepción no decretado, cuyo objetivo es apropiarse de los territorios y sus elementos constitutivos: trabajo vivo, biodiversidad, instituciones, saberes, culturas, tradiciones, bienes comunes, espacios públicos. Una guerra tenazmente emprendida desde los 1970 en contra de los trabajadores a fin de imponer un régimen de acumulación con trabajo flexible, precario y barato; en esa inteligencia se ha quebrado el poder de los sindicatos, derruido el Estado

benefactor y derrocado las conquistas de luchas pretéritas plasmadas en los derechos sociales y laborales. En gran medida la condición humana ha sido reducida a mera fuerza de trabajo, gasto de energía corporal que puede convertirse en un recurso desechable, excluido del régimen de explotación.

Para la tríada del poder corporativo, militar y político, las periferias del mundo son el teatro de operaciones donde emplazan enclaves económicos, áreas de «libre comercio», bases militares, perímetros de seguridad y zonas de influencia. Al final de cuentas, territorios bajo dominio directo o indirecto de los que pueden extraerse las rentas y ganancias extraordinarias que contrarrestan la maligna tendencia al declive de los beneficios. En épocas en las que se reconcentra el poder económico también se desplazan capitales financieros e industriales, de manera que las corporaciones siamesas succionan el excedente generado con el concurso de los trabajadores inscritos en distintas etapas y fases del proceso de valorización. Las redes globales de capital monopolista, en cuya cúspide se encuentran los capitales financieros-industriales, extienden los tentáculos hasta sus terminales apostadas en las periferias que adquieren la forma de filiales, empresas subcontratadas o proveedoras. Tales figuras corporativas descentradas sobreexplotan el trabajo, saquean la naturaleza y se apropian de bienes comunales y del espacio público.

En estas demarcaciones los procesos de reforma del Estado nacional, cuando se ajustan al guión imperialista, recrean las economías de enclave, verdaderas zonas de excepción donde priva sólo el interés corporativo. Los territorios nacionales son desdibujados y entonces se marcan las huellas del despojo, el saqueo, la violencia y la dominación. Las periferias sometidas reconfiguran el modelo de acumulación bajo los ejes de la superexplotación laboral, el extractivismo de recursos naturales y la especulación financiera; en tanto que los Estados asumen el papel de guardianes de los intereses corporativos e implementan programas de austeridad que garantizan los compromisos de la deuda externa y los recursos para dotar de infraestructura,

servicios y seguridad a los grandes negocios; dictan legislaciones proempresariales y establecen políticas de «seguridad» que tutelan la propiedad del gran capital; quebrantan los movimientos sociales y sindicales; establecen un cerco de protección a los grupos políticos y empresariales y controlan política y territorialmente al grueso de la población.

Por una parte, el poder del Estado se aguja para instrumentar el despojo y legalizar la explotación redoblada, construir las economías de enclave, criminalizar la protesta y contener a movimientos opositores, por lo que fortalece los cuerpos de seguridad, y en suma adquiere el rostro de un Estado policial basado en pura dominación. Por la otra, la nomenclatura, legalidad y legitimidad se tornan asuntos irrelevantes para los poderes fácticos que tienen apostados representantes directos u oficiosos de sus intereses en el andamiaje institucional y en las instancias clave de toma de decisión. La plutocracia y el figurativo partido del dinero y el orden comprenden un bloque social dominante en el que resalta el poder de las grandes corporaciones multinacionales y los inversionistas financieros globales, los grandes bancos privados, los medios de comunicación y las múltiples instancias empresariales, gubernamentales, políticas y culturales que dan cuerpo y figura al capital expoliador, que tiene muchos vasos comunicantes con el capital criminal, en realidad una vertiente de la economía capitalista muy rentable que se mueve entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal. De tal suerte que el Estado se ha degradado aceleradamente: de una figura centralista y dominante transita a una forma contrahecha de Estado «fallido» y retrocede hasta configurar una expresión variopinta de proto Estados diseminados en enclaves territoriales donde priva el interés corporativo o la criminalidad. Entonces el Estado pierde su último reducto de legitimidad y presenta un Estado vital en descomposición.

Humberto Márquez Covarrubias